

**Nota de Prensa**  
**Sección de Prensa y Cultura**  
**Embajada de los Estados Unidos - Lima, 27 de junio de 2006**

**Día Internacional de Lucha contra las Drogas**  
**IV FORO INTERNACIONAL**  
**“LA PROBLEMÁTICA DEL NARCOTRÁFICO EN EL PERÚ: NUEVA AGENDA POLÍTICA”**  
**27 de junio de 2006**

**PALABRAS DEL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
**J. CURTIS STRUBLE**

- Señor Nils Ericsson, Presidente Ejecutivo de DEVIDA
- Amigos todos,

Es un privilegio para mí participar en este IV Foro por el “Día Internacional de Lucha contra las Drogas”.

Agradezco la gentil invitación de DEVIDA que, en esta ocasión, me brinda la oportunidad, en primer lugar, de examinar algunos aspectos de la particular y dolorosa realidad que caracteriza al negocio de las drogas ilegales; y, en segundo lugar, abordar los principales aspectos de la cooperación que hemos brindado al Perú en los últimos años a fin de fortalecer el Estado de Derecho, combatir el narcotráfico y apoyar actividades de desarrollo integral en las regiones productoras de coca.

Al mismo tiempo, quisiera expresar el reconocimiento de mi gobierno al gobierno del Presidente Toledo, así como a todos aquellos peruanos que durante los últimos cinco años han participado activamente en esta compleja lucha contra el flagelo del narcotráfico y la producción de drogas.

El narcotráfico es una plaga mundial generada por el propio hombre. Ninguna nación es inmune a sus perversos efectos. Tanto nosotros, en los Estados Unidos, como ustedes en el Perú, somos víctimas, pero también somos responsables.

En nuestras dos naciones la población consume drogas ilegales; en nuestras dos naciones producimos drogas ilegales. Muchos participan con pleno conocimiento de lo que están haciendo en estas actividades criminales que ponen a nuestras comunidades --y a nuestras propias familias-- en un grave peligro. Y lo que es peor, lo hacen por dinero.

Existen diversos niveles en la cadena del narcotráfico:

Tenemos a los señores de la droga que amasan fortunas provenientes de esta actividad delictiva. Ellos, a través de sus empresas criminales, corrompen a las instituciones básicas del Estado democrático.

Profesionales inescrupulosos --banqueros, abogados y contadores--, lavan estas fortunas y reciben su tajada del dinero mal habido.

Existen malos funcionarios del Estado que en el momento preciso voltean la mirada y reciben también su parte a cambio de facilitar el negocio.

Están los expertos en transporte y logística, que mueven ingentes cantidades de insumos químicos necesarios para el procesamiento de la droga que luego trasladan por todo el país. Ellos también reciben su parte.

Y lamentablemente, también están aquellos productores de la materia prima indispensable para la elaboración de la droga.

A pesar de que las circunstancias personales de estas personas pueden ser difíciles, son el primer eslabón de la cadena del narcotráfico. Ellos también, reciben su parte del dinero de la droga.

Solo tres países del mundo producen coca para satisfacer las demandas industriales del narcotráfico: Colombia, Perú y Bolivia. En el año 2004, se estimó que la producción de cocaína colombiana ascendía a 640 toneladas métricas; la producción peruana, a 190 toneladas y la boliviana, a 90 toneladas métricas.

Estos países proveen al mercado mundial de cocaína --y ese mercado está creciendo, pero no en los Estados Unidos. Si bien seguimos siendo el mercado más grande, nuestros niveles de consumo se han reducido durante los últimos años.

En efecto, es alentador para nosotros saber que el consumo de cocaína entre nuestros jóvenes ha disminuido. Y esperamos que esta reducción continúe en los niveles de consumo general.

La DEA conduce regularmente exámenes de laboratorio de la cocaína incautada en los Estados Unidos a fin de determinar la procedencia de la droga.

La hoja de coca producida en el Putumayo, Colombia; la producida en el Huallaga, el Valle del Río Apurímac/Ene y la Convención, en el Perú; y, la coca del Chapare en Bolivia, contiene componentes químicos específicos que nos permiten distinguir dónde fue cultivada. Estas características de identificación permanecen en la cocaína proveniente de esa hoja de coca.

En abril de 2006, la DEA informó los resultados de un estudio científico de más de mil diferentes muestras de clorhidrato de cocaína incautada en los Estados Unidos. Los resultados señalaron que el 88% de las muestras provenían de la coca cultivada en Colombia; el 9% de la coca de los valles del Huallaga, el VRAE y la Convención en el Perú; el 1% del Chapare en Bolivia; y, el 2% fueron muestras cuyo origen no fue determinado.

Los hallazgos de este estudio son similares a los resultados de otros realizados por la DEA: la mayor parte de la cocaína consumida en los Estados Unidos proviene de Colombia. Entonces ¿a dónde va la mayor parte de la cocaína producida en el Perú?

Las drogas y el dinero ilícito que se obtiene por su comercialización pasa de mano en mano. Hace pocas semanas, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito brindó información sobre el precio de venta del clorhidrato de cocaína. En los Estados Unidos, el precio por kilo es de aproximadamente US\$23.000. En Europa, se vende por más del doble: US\$47.000.

El costo para el Perú de la industria de la droga ha pasado desapercibido por la mayoría de la población peruana. El terrible daño ambiental ocasionado al país nos conmueve. El narcotráfico y la producción de drogas han puesto en peligro la biodiversidad única del Perú. Es pues una grave amenaza a su patrimonio natural y al desarrollo sostenible de las generaciones futuras.

La entidad Foro Ecológico del Perú estima que por cada hectárea de coca cultivada, cuatro hectáreas de selva amazónica son deforestadas a través de incendios provocados para habilitar el terreno. Desde 1991 la producción de un millón y medio de toneladas de hoja de coca ha ocasionado la deforestación de más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía peruana. Adicionalmente, el monocultivo que caracteriza a la producción de coca ha degradado el suelo de cientos de miles de hectáreas y provocado su erosión.

El procesamiento de la hoja de coca en pasta básica y clorhidrato de cocaína requiere de una mezcla altamente tóxica de sustancias químicas que, literalmente, está envenenando los ríos de las zonas cocaleras.

DEVIDA estima que entre 1991 y 2004, la producción de cerca de 4.000 toneladas de derivados de la hoja de coca --pasta básica, pasta lavada y cocaína-- requiere de

aproximadamente 11 millones de litros de ácido sulfúrico, 264 millones de litros de kerosene, 3,7 millones de litros de concentrado de amoníaco, 37 millones de kilos de cal y 700.000 kilos de permanganato de potasio. Todos estos insumos químicos son arrojados a los ríos y riachuelos del Valle del Huallaga, del Valle del Río Apurímac y Ene y del valle de la Convención.

En agosto de 2004, el Congreso del Perú aprobó la ley que regula el uso de insumos químicos. Esta iniciativa fue impulsada, en gran parte, por un documental de televisión que mostraba cómo los niños -- hijos de los coccaleros -- trabajaban en las pozas de maceración y procesaban la pasta básica de cocaína.

En marzo de este año, los representantes de tres de los más importantes partidos políticos que participaron en las recientes elecciones firmaron un acuerdo que los comprometía a trabajar juntos a fin de abordar el tema del daño ambiental ocasionado por el narcotráfico en el Perú. Esta encomiable decisión recibió cobertura mediática de una revista local, pero en general tuvo poca atención de los medios y de la opinión pública.

Sin embargo, lo que con frecuencia sí ha captado la atención pública han sido las declaraciones falsas y rumores provenientes de las zonas coccaleras que acusaban al gobierno del Perú de fumigar los cultivos de coca ilegal con apoyo de mi gobierno.

Estas falsas declaraciones también afirman que las autoridades peruanas y norteamericanas promueven el uso del hongo fusarium para contaminar sus cultivos de coca, cuando las evidencias científicas demuestran que los hongos crecen naturalmente allí donde predomina el motocultivo de la coca.

Toda esta persistente desinformación ha distraído la atención local e internacional de una potencial catástrofe ambiental ocasionada exclusivamente por la industria ilegal de las drogas.

Cuando hablamos del narcotráfico, y en el Perú de la producción y tráfico de cocaína, debemos reconocer que se trata de una industria que mueve miles de millones de dólares.

Esta industria cuenta con:

Expertos en finanzas que administran y lavan este dinero;

Abogados que defienden sus intereses;

Redes de distribución logística que coordinan la producción y el embarque de la droga a todo el mundo; y,

Fuerzas de seguridad que protegen sus intereses y sus inversiones.

Se trata pues de un hecho simple y llano: la coca ya está industrializada en el Perú y es controlada por mafias poderosas que amenazan la seguridad nacional de este país.

La coca es el problema. No es la solución de los problemas ni la vía para afrontar los desafíos que el Perú tiene por delante para lograr el desarrollo sostenible de las regiones donde actualmente se produce coca.

Estados Unidos está comprometido con el desarrollo del Perú y apoya sus esfuerzos por:

Fortalecer el gobierno democrático;

Enfrentar la amenaza que representa la industria del narcotráfico para su seguridad nacional; y,

Promover el desarrollo integral y sostenible, particularmente en las zonas coccaleras del país.

Desde el restablecimiento del gobierno democrático en 2001, Estados Unidos ha destinado alrededor de US\$650 millones para apoyar los esfuerzos antidrogas del Perú.

Estos fondos se han destinado en igual proporción para apoyar los objetivos de desarrollo, así como de aplicación de la ley. Hemos enfrentado importantes desafíos y alcanzado notables éxitos.

Uno de los grandes desafíos ha sido enfrentar el aislamiento de las poblaciones. Los programas de desarrollo se han llevado a cabo en áreas del país donde la ausencia del Estado de Derecho y la carencia de servicios básicos prevaleció por años; la infraestructura era mínima o simplemente no existía; la pobreza era extrema y la industria del narcotráfico operaba libremente.

Algunos detractores del desarrollo alternativo decidieron atacarlo deliberadamente. La frase “el desarrollo alternativo es un fracaso” ha sido repetida incesantemente en algunos círculos y aceptada sin ser cuestionada, a pesar de la existencia de mucha información que indica lo contrario.

Por ejemplo, San Martín, una de las regiones más hermosas del país, estuvo por muchos años dominada por la violencia y sometida a los caprichos de narcotraficantes y terroristas unidos por la industria de las drogas.

Durante los últimos diez años, Estados Unidos apoyó el programa de desarrollo alternativo en la región San Martín con una inversión de más de US\$80 millones.

En San Martín se construyó obras de infraestructura y se rehabilitó vías como la carretera Fernando Belaúnde Terry. Se promovió así el florecimiento de una económica lícita, como la producción de cacao que en la actualidad San Martín exporta con éxito a Europa.

Desde 2003, casi 20.000 familias en 256 comunidades de San Martín han erradicado voluntariamente más de 4.000 hectáreas de coca ilícita. El programa de desarrollo alternativo, articulado con programas de fortalecimiento de las instituciones democráticas, salud, educación y medioambiente –todos ellos apoyados por Estados Unidos–, ha puesto el cimiento para la existencia de un desarrollo real y perdurable en la región.

El desarrollo alternativo también ha ayudado a atraer más inversión privada que está mejorando la calidad de vida de más y mejores ciudadanos de San Martín.

Precisamente la reciente Encuesta Nacional de Hogares realizada por el INEI (Instituto Nacional de Estadística), demuestra que entre los años 2001 y 2004 los niveles de pobreza en San Martín cayeron en más de 5%. Y que el nivel de extrema pobreza se redujo drásticamente, de 43% a 22%.

El desarrollo alternativo no es sustitución de cultivos. Ningún comprador podría pagar por un producto lícito el precio que los criminales pagan por la coca. El desarrollo alternativo es un proceso. Un proceso difícil asumido voluntariamente por las propias comunidades y diseñado con su participación conforme a sus condiciones particulares.

Su objetivo es contribuir a crear las condiciones necesarias para que germine el desarrollo sostenible.

La pregunta clave que los críticos del desarrollo alternativo deberían hacer es: ¿qué desarrollo ha traído el cultivo de la coca a las comunidades del Monzón, del VRAE o de otras cuencas cocaleras?

El estudio de las Naciones Unidas publicado hace un año demuestra que las zonas donde predomina la coca son las más pobres del país y tienen menor acceso al agua para consumo humano, a los servicios de agua y desagüe y a los servicios de electricidad, que aquellas áreas donde no se cultiva coca.

El desarrollo genuino, sostenible, solo puede ocurrir allí donde prevalece el Estado de Derecho. En este sentido, es preciso reconocer que durante el gobierno del Presidente Toledo el Perú ha tenido importantes avances en este campo fundamental.

En la actualidad, las perseverantes investigaciones de la Policía Nacional y la acción valerosa de policías y fiscales, uno de los principales narcotraficantes del Perú está tras las rejas.

Hace dos años, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) firmaron un convenio a fin de brindar asistencia técnica a la UIF en las complejas investigaciones de lavado de dinero, delitos financieros y financiamiento del terrorismo. Este convenio se tradujo en una importante y fructífera colaboración entre nuestros dos gobiernos.

Asimismo, en el año 2002, Estados Unidos aceptó el pedido del gobierno de apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho en las zonas cocaleras a través del establecimiento de dos nuevas Escuelas de Policía --una en Mazamari y otra en Santa Lucía. En el año 2005 se graduaron 400 nuevos oficiales de estas Escuelas.

Los narcotraficantes, y los terroristas que les brindan protección, reaccionaron rápidamente con diversos ataques a las nuevas unidades. Jóvenes oficiales perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

Pero la Policía Nacional del Perú, y sus valerosos luchadores contra las drogas, respondieron con decisión e iniciaron una serie de operaciones de interdicción en el corazón del VRAE. Estas acciones fueron determinantes para el decomiso de pasta básica de cocaína que, durante los primeros cuatro meses de 2006, resultó siendo diez veces mayor a los decomisos realizados en el mismo período del año anterior.

En enero de 2006, la Policía Nacional del Perú estableció una tercera Escuela de Policía en Ayacucho, la cual también tuvimos la satisfacción de apoyar. Estados Unidos también ha apoyado los esfuerzos de otras entidades del Perú responsables del cumplimiento de la ley en el área marítima y la seguridad aeroportuaria.

La cooperación entre nuestros dos gobiernos que he descrito muestra sólo unos cuantos ejemplos de la estrecha coordinación establecida a lo largo de varios años. Muchos peruanos y norteamericanos trabajan conjuntamente en estas tareas y han contribuido decididamente al logro de los éxitos alcanzados.

En este sentido, deseo expresar mi especial aprecio al presidente de DEVIDA, Ingeniero Nils Ericsson, que ha asumido su importante y compleja responsabilidad con determinación y vocación de servicio.

Nils, muchas gracias.

Nos hemos reunido muchas veces con nuestras contrapartes peruanas en torno a estos temas, hemos debatido y planificado nuestra cooperación.

Pero ante todo, nos hemos mantenido firmes en la convicción de que:

El narcotráfico --y su industria criminal de las drogas-- es en el presente, una clara amenaza a la seguridad de nuestros dos países;

Y que debemos trabajar juntos para enfrentarlo y derrotarlo.

Muchas gracias.